

¿ES POSIBLE O CONVENIENTE SALIR DEL EURO?

Ramón Utrera Cejudo

Ha sido analista financiero durante treinta años. Socio y miembro del Grupo de Socioeconomía de ISEGORÍA.

¿ES POSIBLE O CONVENIENTE SALIR DEL EURO?

Querer reabrir un debate en el seno de la izquierda transformadora es como mínimo delicado; especialmente si ya se considera zanjado. No importa como se hizo, si fue realmente participativo, o si fue lo suficientemente amplio y profundo. El debate sobre el euro “se hizo” y se cerró, y las posiciones respecto al mismo a partir de ese momento quedaron calificadas de progresistas o reaccionarias con escasa posibilidad de matices. En mi opinión, los debates en la izquierda no deberían quedar nunca cerrados, sino en constante cuestionamiento y revisión, incluso por pura coherencia filosófica y científica; lo contrario es más propio de otras ideologías. Es por tanto de agradecer la posibilidad de este medio para reabrirlo.

El debate del euro en el seno de la izquierda se ligó desde el principio al aspecto político e ideológico, que es fundamental ciertamente; pero si desde el principio se plantea así se impide discernir, analizar y valorar adecuadamente todos los argumentos. Y en esa mezcolanza de ideas se incluyen muchas perspectivas, que por legítimas que sean no son confrontables lógicamente, y eso sólo sirve para enturbiar el problema. A menudo se llegan a establecer relaciones de causa-efecto de forzada o imposible conexión. El objeto de este artículo es abordar las implicaciones puramente económicas directas, e inmediatas en cierto sentido, de una posible salida del euro. No obstante, creo que previamente conviene hacer una puntualización a alguno de los argumentos políticos habituales.

El trasfondo del debate sobre el euro para la izquierda transformadora es la pertenencia o no a la UE, y que el hecho de tener una divisa común impide una política monetaria y cambiaria autónoma, e incluso una política económica independiente y progresista. Sin embargo, hay un factor político que tiene consecuencias, y que a menudo se pasa por alto, y es que en estos debates se olvida que la UE es como es porque la correlación de fuerzas en ella es conservadora; es decir, nos es desfavorable en estos momentos. Pero es la misma correlación desfavorable que hay a escala nacional, donde el PP sigue gobernando a pesar de su política de recortes y sus problemas de corrupción. Esa misma correlación desfavorable se da también a escala autonómica, donde también gobierna el PP, a pesar de las mismas objeciones. Y lo que es peor, en todos los casos establecida democráticamente.

También hay que recordar, aunque sea obvio, que vivimos en un sistema capitalista y conservador donde la correlación de fuerzas sociales y económicas también es conservadora. Esto es importante para poder delimitar si nuestro margen de maniobra político y económico cambiaría en contextos más reducidos, en un mundo inmerso en un proceso opuesto de globalización galopante. Y todo ello sin entrar en el análisis de si las posibilidades de una evolución progresista o menos reaccionaria son mayores a escala europea o a escala nacional. Europa hoy día no es en absoluto revolucionaria; pero los peligros de aburguesamiento y derechización para España fuera de la UE son

aún mayores. El riesgo de satelización política y económica fuera no sería una opinión, sería un hecho. La globalización es un proceso de integración de facto que no se para a pedir permiso.

No obstante, abordemos las implicaciones “técnicas” de una salida del euro para aportarla al debate. ¿Qué pasaría a partir del día siguiente de esa salida? ¿Qué efectos tendría? ¿Hasta qué punto y hasta cuándo la sociedad, la economía, las empresas, las denostadas finanzas de las que vivimos, etc. podrían o estarían dispuestas a aguantar los efectos? Y eso en una sociedad en la que la izquierda a la izquierda del PSOE nunca ha logrado un apoyo más allá de un cuarto del electorado.

Implicaciones desde el punto de vista cambiario.

Quienes proponen la salida del euro, lo hacen para poder acometer una devaluación de la divisa que estimule las exportaciones. El problema es que esa devaluación encarecería simultáneamente las importaciones; y aquellas que no pudieran ser sustituidas o evitadas contribuirían con sus incrementos de precios a la inflación. Además los efectos de una devaluación no son eternos, pasado un tiempo estos se diluyen y si la economía no se ha ajustado -que es para lo que se hace una devaluación- habría que hacer más; con riesgo de entrar en una espiral de devaluaciones inflacionistas, de la que la historia pasada y reciente nos dan numerosos testimonios desastrosos, sobre todo en Latinoamérica.

En cualquier caso, probablemente no haría falta, o no daría tiempo, porque los propios mercados financieros devaluarían la nueva divisa el mismo día en que entrara en vigor. Para estos sería la moneda de una economía más débil y con mayores desequilibrios, y, lo que es más importante, al servicio de un gobierno con el objetivo declarado de hacer políticas más laxas y menos disciplinadas. Los mercados no fijan las cotizaciones de las divisas y los activos en función de la bondad moral de los objetivos, sino del grado de equilibrio y fortaleza de las cuentas del país. A alguien se le podría ocurrir que no hay que aceptar este punto de vista deshonesto de los mercados, y que debería ser el gobierno el que debería fijar el tipo de cambio. Como lo normal, lógico y habitual en estos casos es que no haya reservas en el banco central para respaldar esa medida, el gobierno en cuestión se vería obligado a retirar la convertibilidad y a fijar un tipo de cambio ficticio. La historia de todos los que lo han hecho -países socialistas, del Tercer Mundo, etc.- muestra que no ha funcionado nunca, que siempre ha provocado la aparición de mercados negros de todos los productos y de la propia divisa, y como mínimo de dos tipos de cambio: uno oficial, que sólo se usa a la fuerza, y otro negro, que es al que todo el mundo acude en cuanto puede. El resultado final es que la nueva moneda acaba convirtiéndose en una moneda satélite de alguna otra grande, sólo que ya sin la más mínima capacidad de influir en sus decisiones, por mucho que indirectamente estas le afecten.

Implicaciones monetarias.

Todos los tipos de interés, en todos los plazos, se desbocarían –Esta ha sido la mayor ventaja que ha supuesto la pertenencia al área de la moneda única: los tipos de interés más bajos de los que nunca España ha podido disfrutar en su historia-. Los tipos a corto (de un día hasta un año) –los que puede controlar el banco central de turno- habría que subirlos para evitar un desplome excesivo de la nueva divisa y contener la inflación. Esto permitiría pagar más a los ahorradores en las cuentas a corto plazo, pero incrementaría los tipos de los préstamos a corto plazo, y presionaría al alza los tipos de las operaciones a largo plazo, incluidos por supuesto los préstamos.

Los tipos a largo plazo (los de un año en adelante) se dispararían, por efecto de la citada subida de tipos oficiales del banco central, y sobre todo por efecto de la falta de confianza de los mercados –es físicamente imposible controlarlos-. Como consecuencia de ello todos los tipos de interés de todos los préstamos se elevarían, dado que los mercados financieros funcionan como vasos comunicantes. El súbito encarecimiento de los préstamos afectaría a la economía de las familias, frenando su consumo, y a la de las empresas, frenando su actividad y sus inversiones, algunas de las cuales incluso quebrarían por falta de liquidez.

Implicaciones desde la perspectiva de las deudas.

El cambio de divisa obligaría a devolver la deuda pública –estatal, autonómica o municipal y la privada, ambas contraídas en euros, con pesetas devaluadas; es decir, que el esfuerzo para pagarlas sería mucho mayor. Este encarecimiento podría llegar en muchos casos hasta hacerlas imposibles de pagar –pero ahora no por decisión propia sino por causa de fuerza mayor-. La nueva deuda pública que se emitiera tendría que hacerse a los nuevos altísimos tipos que impondría el mercado, debido a la devaluación y a los impagos; y eso suponiendo que en los primeros años hubiera alguien que quisiera arriesgarse a financiarnos, aparte de los tiburones y los usureros habituales.

A las empresas privadas –cuyos préstamos están lógicamente indicados a los públicos- que no hubieran quebrado, les resultaría muy difícil o imposible devolver los préstamos, y por tanto renovarlos o lograr más. Las que dependieran de la financiación externa, tendrían serios problemas, se paralizarían en el mejor de los casos o quebrarían en el peor. Salvo unas pocas excepciones que tienen la mayor parte de su balance fuera, hasta el punto de poder resistir el impacto sobre la parte del balance que estuviera dentro.

Implicaciones para el déficit fiscal.

La dificultad para encontrar financiación exterior obligaría a recortar a la fuerza el déficit fiscal. Aunque es cierto que si se dejara de atender el servicio de la deuda como

proponen también los defensores de la salida del euro habría menos salidas. Lo cierto es que habría que ajustar los gastos a los ingresos, sí o sí; de nada valdría ninguna consideración moral. El encarecimiento de la financiación, por no hablar de la ausencia de inversores en deuda pública por culpa del impago, nos llevaría a una austeridad fruto no ya de la imposición de nadie sino de los limitados ingresos reales de caja.

Implicaciones económicas generales.

Se produciría una fortísima y brusca huida de capitales por temor a la devaluación, la depreciación de activos y los previsibles controles de capitales. Con el problema añadido de que la tecnología, el sistema y la ingeniería financiera actual permiten masivas evasiones de capitales en cuestión de minutos. Una divisa débil o inestable frenaría la inversión exterior, como se observa habitualmente desde hace décadas en todo el mundo, y más aún en un contexto de huida de capitales. La devaluación sí abarataría el país a especuladores y tiburones, que podrían comprar activos españoles mucho más baratos. Una devaluación se hace para crear una economía más fuerte, no más social; si no va acompañada de medidas restrictivas el efecto será el contrario. Una moneda más débil no nos haría más independientes de la globalización, sino paradójicamente nos dejaría más a su merced, debido a nuestros déficits fiscal y exterior. No podemos olvidar que el sistema que hoy impera a escala internacional es el más puramente capitalista, y su lógica funciona como tal. Aunque el propio planteamiento de la propuesta ya lleve suficientes medidas contradictorias para hacerlo inviable por sí mismo.

La caída del consumo que se produciría por efecto de la subida de tipos de los préstamos de los consumidores, particularmente los de las viviendas, y su consiguiente efecto en la demanda para las empresas, unida al alza de los de los préstamos de estas tanto para circulante como para inversiones tendría graves consecuencias en términos de empleo. Lo cual abriría la espiral descendente típica de la economía en épocas de crisis: menos demanda y actividad lleva a menos empleo, menos empleo y más incertidumbre lleva a menos demanda y menos actividad. Romper esa dinámica sólo se puede con medidas drásticas de intervención pública. Cuando se puede.

Implicaciones para el sistema financiero nacional.

Los bancos que tuvieran una gran parte de su balance en el exterior podrían salvarse, si la gestión de este fuera equilibrada en cuanto al origen y la colocación de los fondos captados; pero si el balance está básicamente en el interior en cuanto a la colocación de los fondos, pero ha recurrido frecuentemente al exterior para la captación, circunstancia habitual dada la escasez de ahorro interno suficiente, tendrían graves problemas, incluso de supervivencia. Es una situación parecida en cierto sentido a la de las administraciones públicas a la que nos hemos referido más arriba.

La idea de que se trataría de problemas particulares de esos bancos, de los que el país puede desentenderse –que es la que básicamente sustenta la campaña reciente de no salvar a los bancos que quiebren- minusvalora inconscientemente este problema cuando afecta a muchos bancos o a bancos sistémicos. La Reserva Federal ya lo hizo así en septiembre del 2008 y fue el detonante de la mayor crisis financiera y económica mundial desde la de 1929; hasta el punto de que hoy día nadie duda que fuera un error y de que ningún banco central en el mundo ignora la lección. A los bancos no se les ha salvado para hacer un favor a nadie por poderoso que sea, se les ha salvado porque los efectos indirectos para la economía del país de un corte generalizado de la financiación por temor al “contagio” no son soportables en términos macroeconómicos ni sociales. Otra cosa, y esa es la verdadera cuestión de fondo, es por qué se ha consentido llegar a una situación semejante o por qué la economía de un país tiene tal grado de vulnerabilidad a esa circunstancia. Pero mientras la estructura económico-financiera nacional e internacional del sistema en que vivimos esté establecida y articulada de tal modo que la financiación externa se capta sobre todo a través de las instituciones financieras, lo que le pase a los bancos afectará enormemente a toda la sociedad, guste o no. Al menos mientras no se tenga suficiente fuerza para cambiarla.

Por otro lado, desde el principio de la crisis se ha denostado la presencia en el sistema monetario del euro como una terrible desgracia histórica, como la causa de todos nuestros males y como una cárcel que nos impide cuidar de nuestros propios intereses y nos deja al servicio de los ajenos. ¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Es exactamente así? ¿El funcionamiento del euro y del BCE están exclusivamente al servicio de la oligarquía financiera europea o tienen algún sentido algunas de sus políticas? ¿Estar en el euro ha sido un desastre siempre? ¿Hasta qué punto estando fuera haríamos una política monetaria y cambiaría muy distinta?

Nuestra experiencia en el sistema monetario europeo.

Estar en la zona euro ha significado tener una moneda fuerte y estable. Lo cual establece una relación de reciprocidad con un entorno de baja inflación, al que históricamente no estábamos acostumbrados; que entre otras ventajas sirve para que la actividad económica sea más fácil y barata, y por ende para que los inversores no especulativos, los que interesan de verdad, inviertan en este país, donde no sobra el dinero para la inversión. Inversión directa, de todo tipo, incluida en deuda pública y privada. Pero sobre todo pertenecer a la eurozona ha permitido tener los tipos de interés más bajos de toda la historia de este país; básico e imprescindible para crear actividad, empleo, riqueza, obras públicas, la estructura de un Estado de Bienestar, viviendas, etc. etc. Sea con gobiernos de derecha o de izquierda.

Como todo el mundo sabe cualquier aspiración colectiva o individual depende de su coste directo y del de su financiación, y esta última es mucho más baja en el entorno de una moneda fuerte, por pura lógica. Otra cosa es si las empresas, las familias y las

administraciones públicas han aprovechado esa “oportunidad” para financiar racionalmente y con el adecuado proceso de decisiones, las necesidades más importantes e urgentes de la sociedad española. Los errores que se hayan podido cometer no han sido responsabilidad del BCE, la Troika, Merkel, o la oligarquía financiera europea o mundial. Evidentemente estos no son actores desinteresados, tienen su propia lógica de clase y particular –por no hablar de que la receta de la austeridad no es sólo una idea reaccionaria neoliberal sino también cultural, propia de pueblos con otras costumbres financieras-; pero cometemos un grave error si metemos en ese mismo saco nuestras responsabilidades, las cuales son en mi opinión las principales. Nadie nos ha obligado a invertir en aeropuertos vacíos, líneas de AVE deficitarias, hospitales cerrados, y todo el sinfín de obras absurdas que han sido motivo de escándalo en los últimos años. Por no hablar de los gravísimos errores en materia presupuestaria de muchos ayuntamientos, comunidades autónomas, y hasta del Estado central, sin atisbos de criterios serios de sostenibilidad; los cuales no deberían mezclarse nunca con los de moralidad o buenas intenciones. Como tampoco tiene que ver con los efectos de una presumible división internacional del trabajo que condenaría a las economías del sur y del este a un roll periférico.

La realidad de la división internacional del trabajo que condena a España a ser periférica.

Tampoco es exacto el mantra político de la izquierda sobre la división internacional del trabajo que “condena” a la economía española a ser periférica. Seamos conscientes que para la oligarquía económico-financiera mundial su primer valor de referencia es su beneficio particular –la perspectiva de clase antes que cualquier otra-, y que en el proceso de globalización financiera y económica que está en marcha desde los años ochenta, en el citado “club” se entra y se sale a golpe de talonario. Sólo por eso han “entrado” los grandes bancos españoles, la Telefónica, Repsol, Inditex, algunas constructoras, etc. etc. Pero además es que cuando en los años ochenta se produjo la reconversión industrial y la verdadera internacionalización de la economía española, nada impedía que el empresariado español invirtiera en sectores estratégicos, de futuro, innovadores, de largo plazo, etc. Pero con honrosas excepciones prefirieron hacerlo en sectores poco complicados como la vivienda y la hostelería, de beneficio a corto plazo, especulativos, poco necesitados de inversión en I+D, de menor competencia externa, etc. Los cuales acabarían generando nuestra propia burbuja especulativa; la cual se sumó posteriormente a la internacional en la crisis actual, en un *tótum revolútum* perfecto para diluir y esconder responsabilidades. Por cierto ninguna autoridad del signo político que fuese puso ninguna objeción seria a este proceso cuando se estuvo generando, ni siquiera las de color más progresista. Es decir, que en la cacareada injusta división internacional del trabajo tuvo más que ver la cortedad de miras y desidia de nuestro empresariado y la complacencia de nuestros diversos gobiernos de turno que la perversidad del capital extranjero europeo.

Tanto el PP, como en menor medida el PSOE, cuando se han alternado gobernando han utilizado a menudo la excusa de las imposiciones de Bruselas, para justificar políticas que ellos habrían acometido sin duda y de buen grado por su propia cuenta. El PP ha encontrado en el neoliberalismo, imperante también en Bruselas, el justificante teórico y racional de sus políticas, aparte de servirle como lavado de cara doctrinal de sus orígenes franquistas y para su homologación política en Europa y en el mundo occidental.

Pero si gobernara la izquierda transformadora ¿qué haría?

Finalmente, queda la pregunta de qué políticas haría la izquierda en caso de tener capacidad de decisión, fuera saliéndonos del euro o fuera al frente de la política monetaria y cambiaria de la zona euro. Aquí está probablemente la raíz del problema de este debate. Sería diferente evidentemente, pero no hasta el punto de lo que se escribe en los programas o se clama en la calle o en los foros con cierta ligereza, fruto de la ausencia de responsabilidad inmediata. Seguramente se haría una política monetaria expansiva –que por cierto es la que ya hace el BCE en contra del parecer de los alemanes, entre otros-; sería menos estricta en cuanto a los objetivos de inflación, de reducción del déficit público, etc., en general en cuanto a la austeridad como filosofía económica para salir de la crisis. Pero no se podría, o no se debería, abandonar el rigor, la disciplina, ni la idea de la necesidad de buscar objetivos de equilibrio o de déficits sostenibles en las cuentas, especialmente los de la balanza de cuenta corriente y fiscal. Y no por razones ideológicas o teóricas personales, sino de pura sostenibilidad y capacidad de control político. La idea “progresista” de que en una sociedad socialista esa política se puede obviar es una de las responsables de que esas experiencias socialistas o revolucionarias hayan fracasado; desgraciadamente, pero es así. Los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los criterios de convergencia del Tratado de Maastrich se podrían discutir, fijar otros niveles, otros calendarios, otros objetivos, etc. pero no tirar a la papelera. Porque ignorarlos completamente como algunos pretenden es una idea ingenua que nos autodestruiría. Objetivos reales y racionales hay que marcar y respetar, y como en todo la ética por respetable que sea ha de tener en cuenta la realidad.

Lo que sí sería completamente distinto sería la función reguladora y controladora que una autoridad financiera democrática debería ejercer sobre los mercados financieros y sobre *todas* las instituciones financieras. Una institución progresista que iría completamente a contracorriente del proceso desregulador y globalizador impulsado por el neoliberalismo en los últimos treinta años, que ha sido la raíz de todas las crisis habidas desde entonces, de su gravedad y de todos los problemas que han ocasionado. Porque ese proceso es la verdadera causa de fondo de los principales problemas económicos y sociales actuales, y abordarlo es una cuestión de supervivencia. Avanzar hacia esa autoridad financiera nos llevaría a un enfrentamiento político, social, económico e ideológico sistémico. Y por esa razón generaría más

enfrentamientos con la derecha que el desmontaje del Estado de Bienestar o cualquier avance social o democrático. Pero es la única vía, a no ser que haya quien piense que hay condiciones en estos momentos para un proceso revolucionario. Esta autoridad financiera recibirá todas las objeciones posibles desde los puntos de vista ideológicos más radicales de la izquierda. Pero es a la única a la que se podría recurrir en tanto la izquierda no desarrolle una alternativa ideológica operativa que la pueda sustituir. Porque una de las cosas que la historia de todas las experiencias revolucionarias habidas hasta ahora ha demostrado es que no se entendió ni el problema, ni todos sus matices, que no estábamos preparados para abordarlo con garantías de éxito, y que hasta la fecha aún seguimos sin lograr dar con esa alternativa ideológica progresista.